

PSI

INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

La federación sindical internacional de trabajadorxs de servicios públicos

ESPAÑOL



2021

Informe Anual

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Introducción | 4 |
| Lucha contra la privatización y | |
| Fomento de los servicios públicos de calidad | 6 |
| Influir en las políticas mundiales | 9 |
| Fiscalidad | 10 |
| Comercio | 15 |
| Digitalización | 18 |
| Migración y refugiadxs | 20 |
| Crisis climática | 24 |
| Derechos sindicales, incluidos la CIT, | |
| Acciones de solidaridad y campañas | 26 |
| Servicios públicos de distribución | 28 |
| Empresas multinacionales | 40 |
| Gobiernos locales y regionales/ Municipales | 42 |
| Administración nacional y funcionarixs internacionales | 46 |
| Remunicipalización | 47 |
| Lucha contra la corrupción y protección de lxs informantxs | 48 |
| Salud y servicios sociales | 49 |
| Educación, cultura y medios de comunicación | 53 |
| Apoyo a comunicaciones y campañas | 54 |
| Promoción de la igualdad y equidad | 56 |
| Trabajadorxs LGBT+ | 58 |
| Trabajadorxs jóvenes | 61 |
| Apoyo al desarrollo sindical | 64 |
| Europa (EPSU) | 66 |
| Informe financiero | 72 |

A hora más que en cualquier otro momento que se recuerde, el papel vital que desempeñan lxs trabajadores de los servicios públicos ocupa un lugar prominente en el imaginario colectivo. En 2021, ante los nuevos retos planteados por la pandemia, la ISP trabajó sin descanso para que estxs trabajadores, sometidxs a unas condiciones innecesariamente brutales como consecuencia de los años de austeridad, se convirtieran en una fuerza de acción política para reconstruir nuestros servicios públicos, acabar con las políticas de austeridad que alimentaron esta crisis e incrementar el poder sindical a fin de garantizar que lxs trabajadores dispongan de las condiciones necesarias que les garanticen su seguridad en el trabajo.

Nuestra federación sindical desempeñó un papel crucial en la configuración de la respuesta mundial a la pandemia, defendiendo los derechos de lxs trabajadores de primera línea y poniendo de relieve la urgente necesidad de que se invirtiera más en los servicios públicos a escala mundial. A medida que la pandemia se agravaba en todo el mundo, nuestra



INTRODUCCION

federación sindical se movilizó para defender los derechos de lxs trabajadores de primera línea y promover políticas que abordaran las graves desigualdades que la pandemia puso al descubierto, así como su impacto devastador en las comunidades vulnerables. Nos convertimos en uno de los principales socios de la campaña mundial a favor de la exención de los ADPIC, trabajando junto a MSF, Amnistía Internacional y los socios de la coalición Peoples Vaccine Alliance (Vacunas para la gente) para conseguir que más de cien gobiernos apoyen la exención de los ADPIC de las vacunas destinadas a los equipos y suministros vitales de respuesta a una pandemia.

Uno de nuestros principales logros en 2021 fue la publicación de nuestro Informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal, que puso de manifiesto el coste brutal de la evasión fiscal en términos reales: ahora sabemos cuántxs enfermerxs pierde cada país y qué países están alimentando esta tendencia. Este informe ya se ha convertido en una herramienta crucial en el marco de nuestros continuos esfuerzos por promover la justicia fiscal y una mejor inversión en el sector público, especialmente cuando se une a la serie de informes publicados por CICTAR que exponen cómo las cadenas de cuidado privatizadas eluden impuestos y perjudican a lxs trabajadores y residentes. También desarrollamos un programa de capacitación de tres años sobre los cambios relacionados con la digitalización para ayudar a nuestra membresía a adaptarse al cambiante panorama laboral que la pandemia está acelerando.

Además, trabajamos para influir en las políticas mundiales en materia de migración y movilidad de lxs trabajadores de la salud, refugiadxs y migrantes, y cambio climático. Nuestra labor de cabildeo en estos ámbitos tenía como objetivo garantizar la protección de los derechos de lxs trabajadores y la accesibilidad de todas las personas a los servicios públicos durante la pandemia, independientemente de su procedencia o condición. Nuestra colaboración con Action Aid ayudó a revelar que la austeridad del FMI recorta 3 millones de trabajadores de primera línea de los sistemas de salud más frágiles del mundo.

Seguimos desarrollando actividades de cabildeo en línea, análisis de políticas, investigaciones y comunicaciones innovadoras a través de una serie de proyectos con nuevos socios financiadores, centrados específicamente en influir en los planes nacionales y mundiales de respuesta a la COVID-19.

Además, trabajamos en solidaridad con nuestra membresía LGBT+ y sus aliados, y lideramos la creación de una campaña cohesionada a escala mundial en favor de los derechos de las personas LGBT+ en el seno del Consejo Global Unions. También seguimos movilizando a lxs jóvenes trabajadores en torno a aquellas cuestiones que les afectan específicamente, como la digitalización, la sindicalización, las nuevas formas de trabajo y el cambio climático.

Estos son solo algunos de los aspectos más destacados de nuestro trabajo que marcaron este año. Para concluir, me gustaría expresar mi profunda gratitud a todxs nuestrxs miembros afiliadxs; su incansable trabajo y dedicación frente a los retos sin precedentes planteados por la pandemia de COVID-19 mantuvieron con vida a millones de personas, y demasiadxs de ellxs sacrificaron su vida por su trabajo. Nuestra labor ahora debe consistir en trabajar juntxs para garantizar que se aprendan las lecciones y que lxs trabajadores de los servicios públicos obtengan por fin la mejora de la seguridad y las condiciones que se merecen en sus puestos de trabajo.

En solidaridad para siempre,

Rosa PAVANELLI,
Secretaria General de la ISP
Internacional de Servicios Públicos

LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN Y

Promoción de los servicios públicos de calidad

En 2021, se dio un fuerte impulso a la lucha contra la privatización y a la promoción de los servicios públicos de calidad. La situación del agua en Yakarta fue uno de los principales focos de atención y tanto la comisión nacional de lucha contra la corrupción como la agencia nacional de auditoría recomendaron que no se renovaran las concesiones privadas debido a los posibles problemas de corrupción. La política del Banco Mundial de “Maximizar el financiamiento para el desarrollo”, que promueve subvenciones públicas a los inversores privados, también fue motivo de preocupación, ya que sigue fomentando la privatización. El Informe Doing Business, que clasifica a los países en función de lo favorables que son a las empresas privadas, se interrumpió debido a las denuncias de injerencia política. El FMI siguió haciendo hincapié en la austeridad y los recortes de los salarios públicos, mientras que el G20 no propuso soluciones significativas para reducir la deuda de los países en desarrollo.

Para promover los SPC, la ISP colaboró con ONG en la elaboración de un Manifiesto y

celebró una mesa redonda de relatores especiales de la ONU sobre el papel que desempeñan los servicios públicos para hacer efectivos los derechos humanos. Se renovaron el boletín y el sitio web del Observatorio de la privatización (Privatization Watch), y se animó a las afiliadas a apoyarlos proporcionando actualizaciones e información. La ISP también siguió apoyando las campañas de las afiliadas poniéndolas en contacto con aliados y desarrollando los componentes digitales de las campañas.

La ISP llevó a cabo varias actividades para poner en práctica su estrategia de justicia fiscal, que incluyeron la celebración de reuniones estratégicas virtuales y la realización de talleres sobre justicia fiscal en las distintas regiones. Además, CICTAR – creado por la ISP en 2018 para ayudar a los sindicatos a obtener pruebas fehacientes sobre la evasión fiscal de las empresas – aportó pruebas a una investigación parlamentaria australiana en la que se exponían los problemas de la contratación laboral en el sector público. CICTAR también colaboró con FNV para realizar una investigación sobre Uber, “Taken

for a Ride”, que se publicó en más de 20 países en el mes de mayo.

Se presentó el Informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal, en el que se calculan los costes económicos y sociales del fraude fiscal internacional en más de 190 países, de publicación anual. La ISP siguió de cerca las negociaciones de la OCDE y el G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y exigió un mayor grado de ambición. La UE acordó establecer la información pública desglosada por países, un paso parcial hacia la transparencia fiscal. La ISP también colaboró con ActionAid para dar a conocer el impacto nocivo que tienen las restricciones en el coste salarial del sector público promovidas por el FMI, publicando una nueva investigación que demuestra que las medidas de austeridad del FMI eliminan a 3 millones de trabajadores de primera línea de los sistemas de salud más frágiles del mundo. En general, la ISP siguió aplicando su Estrategia en materia de Justicia Fiscal y promoviendo los SPC a través de diversas iniciativas y campañas en 2021.

INFLUENCIA EN LAS

políticas mundiales

En 2021, la ISP participó en actividades de cabildeo, estableció redes y forjó alianzas a escala mundial para influir en las políticas en materia de migración y movilidad de lxs trabajadores de la salud, refugiadxs y migrantes, y cambio climático. También llevamos a cabo campañas de comunicación y asociaciones con otras organizaciones para promover el acceso universal a las vacunas, apoyar a lxs trabajadores de primera línea y luchar contra la privatización. La ISP ejecutó varios proyectos destinados a apoyar a las afiliadas, y se propuso estabilizar y consolidar la cartera de proyectos ya existente, explorando al mismo tiempo el uso de las tecnologías digitales para alcanzar objetivos más amplios.

FISCALIDAD

En el pasado, la ISP ha sido una firme defensora de la información pública desglosada por países (CBCR, por sus siglas en inglés) destinada a garantizar la transparencia de las prácticas fiscales de las empresas multinacionales. La ISP ha trabajado para garantizar que las normas voluntarias, como la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI, por sus siglas en inglés), con sus normas de información desglosada por países (CBCR), sean sólidas y eficaces. La ISP también ha presionado a la OCDE para que apoye las medidas de rendición pública de cuentas en las actuales revisiones de sus propias normas. Tras años de campaña, el 3 de marzo de 2021, los ministrxs de la UE votaron a favor de finalizar las negociaciones sobre una directiva para establecer la información pública desglosada por países en la UE. Sin embargo, esta propuesta contiene actualmente varias lagunas, y la ISP ha contratado a una persona que trabajará con nosotros y con la FSESP para ayudar a las afiliadas a presionar a sus gobiernos con el fin de que la norma sea lo más sólida posible. La ISP ha elaborado un informe destinado a las afiliadas en el que se explica por qué se trata de una medida importante para los trabajadores y los sindicatos.

En 2018, la ISP creó CICTAR (Centre for International Corporate Tax Accountability and Research), el centro de investigación de rendición fiscal internacional, para ayudar a los sindicatos a obtener pruebas sencillas y fehacientes sobre la evasión fiscal de las empresas que puedan utilizar en sus campañas sindicales. En la actualidad, CICTAR se centra en denunciar las prácticas fiscales y la falta de responsabilidad financiera de las empresas con ánimo de lucro dedicadas al cuidado de las personas mayores. Se ha descubierto que estas empresas ofrecen un bajo nivel de cuidados y son responsables de un gran número de muertes que podrían haberse evitado en el marco de la COVID-19. También han recibido grandes cantidades de fondos públicos de los que no han rendido cuentas y a menudo pagan pocos impuestos sobre sus beneficios. En enero de 2020, CICTAR publicó un informe en el que exponía las prácticas fiscales de Revera, el segundo mayor operador de cuidados de larga duración de Canadá, que atrajo el interés de los medios de comunicación de Canadá y Reino Unido. CICTAR y la ISP publicarán en breve un informe sobre las formas más eficaces de gravar a las grandes empresas digitales. En marzo, CICTAR colaboró con FNV, Países Bajos, para examinar las disposiciones fiscales de Uber en

los Países Bajos. Doce sindicatos de tres continentes apoyan ahora a CICTAR, así como FES, la fundación Joffe y Alex Perry Trust. A finales de 2020, el consejo votó a favor del establecimiento de CICTAR como entidad permanente y varias afiliadas aumentaron sus contribuciones.

La ISP sigue presidiendo el Comité Director de la Comisión Independiente sobre la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT, por sus siglas en inglés) y apoya la labor de cabildero que lleva a cabo en la OCDE y las Naciones Unidas en cuestiones relacionadas con el impuesto de sociedades global. La ISP ha supervisado y ejercido presión en el proceso BEPS 2.0 de la OCDE, pero parece poco probable que se obtenga un resultado satisfactorio en materia de fiscalidad digital. Las recientes declaraciones de Joe Biden y Janet Yellen de que EE.UU. aumentará su tasa del impuesto de sociedades al 28% y apoyará una tasa impositiva mínima global son alentadoras. Si no se llega a un acuerdo en materia de fiscalidad digital, es probable que muchos gobiernos introduzcan impuestos sobre los servicios digitales. Sin embargo, muchos de ellos están mal diseñados, serán regresivos y probablemente repercutirán en los consumidores. En octubre, la ISP y CICTAR

elaboraron un informe para las afiliadas en el que se exponían los principios que deben regir la tributación de las empresas digitales.

El 25 de febrero, FACTI publicó su informe final, en el que dejaba claro que los problemas del sistema actual son sistémicos y requieren soluciones sistémicas que sean inclusivas y fomenten la cooperación, no la competencia fiscal y la carrera hacia el abismo. El informe criticaba duramente las actuales reformas de la OCDE y ponía de manifiesto las principales lagunas de la actual arquitectura mundial. El informe presentaba catorce recomendaciones para el cambio, casi todas ellas en línea con las posturas políticas que la ISP mantiene desde hace tiempo, como la tributación unitaria, la información pública desglosada por países, la tasa mínima global del impuesto de sociedades y el intercambio automático de información fiscal.

La ISP lleva casi diez años siguiendo las negociaciones de la OCDE y el G20 relativas a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS). En los últimos tres años, la atención se ha centrado en concluir las negociaciones para gravar a los gigantes digitales e introducir una tasa mínima mundial del impuesto de sociedades. La ISP expuso sus peticiones en 2020 y desde entonces ha trabajado con sus afiliadas para reclamar un mayor grado de ambición. El 8 de octubre, el foro de negociaciones de la OCDE anunció que había llegado a un acuerdo. Si bien

finalmente las negociaciones han logrado poner fin al apoyo oficial a la competencia fiscal y permitirán recaudar unos 150.000 millones más procedentes de las mayores empresas mundiales, la ISP ha afirmado que no es suficiente para acabar con el fraude fiscal corporativo.

La ISP y sus socios lanzaron en noviembre de 2020 el informe inaugural sobre el estado de la justicia fiscal, la primera publicación hasta la fecha que aborda los costes económicos y sociales del fraude fiscal internacional con estimaciones exhaustivas para más de 190 países. En 2020, el informe estimó que cada año se perdían más de 427.000 millones de dólares estadounidenses debido al fraude fiscal internacional. Según las estimaciones de la ISP, esta cifra equivale al salario de 34 millones de enfermerxs al año, o al salario de un/a enfermerx cada segundo. El informe se elaborará anualmente con un tema nuevo cada año. La edición de 2021 se centró en el tema de la utilización de los ingresos fiscales perdidos para financiar el acceso a las vacunas. Las cifras muestran que podríamos vacunar al mundo tres veces con los ingresos anuales perdidos, lo que equivale a vacunar a 1.000 personas cada segundo.

CICTAR aportó pruebas a una investigación parlamentaria australiana sobre los problemas de la contratación laboral en el sector público. CICTAR y la ISP habían publicado anteriormente un informe sobre las formas más

eficaces de gravar a las grandes empresas digitales mediante un impuesto sobre los beneficios digitales. En mayo de 2021, la investigación de CICTAR sobre Uber, "Taken for a Ride", en colaboración con FNV, se difundió en más de 20 países.

La ISP ha seguido desarrollando su trabajo con ActionAid para dar a conocer el impacto nocivo que tienen las restricciones en el coste salarial del sector público promovidas por el FMI, publicando una nueva investigación en octubre que pone de manifiesto que las medidas de austeridad del FMI recortan los puestos de trabajo de 3 millones de trabajadores de primera línea de los sistemas de salud más frágiles del mundo. Para ello se elaboraron vídeos cortos sobre tres regiones en los que trabajadores de primera línea explicaban los daños causados por los recortes en la financiación del empleo público.

La pandemia de COVID ha aumentado la presión ejercida sobre los presupuestos públicos, ya que los gastos generados por las emergencias han aumentado y los ingresos han disminuido debido a la recesión económica, lo cual ha vuelto a atraer la atención hacia las políticas fiscales. Si los gobiernos no son capaces de recaudar más ingresos a través de los impuestos, es probable que veamos un aumento de la deuda soberana y la introducción de severas medidas de austeridad.

COMERCIO

En el pasado, la ISP ha participado activamente en la promoción de prácticas comerciales justas en todo el mundo. La ISP ha trabajado para oponerse a las disposiciones perjudiciales de los acuerdos comerciales neoliberales que restringen la capacidad de los gobiernos de prestar servicios públicos. Para ello, ha ejercido presión en la OMC, en los acuerdos comerciales regionales y se ha opuesto a los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).

La ISP también ha participado en campañas para detener el acuerdo comercial UE-Mercosur y oponerse a las normas comerciales del comercio electrónico que mercantilizan los datos e impiden que los gobiernos puedan hacer uso de ellos en la prestación de los servicios públicos y regular su uso privado en aras del interés público. El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es otro ámbito de preocupación a cuya expansión se ha opuesto la ISP, especialmente en África. El TCE otorga a las empresas del sector energético el poder de interponer demandas a los Estados ante

tribunales internacionales de arbitraje por miles de millones de dólares a través de una de las peores cláusulas ISDS que aún persisten para los inversores.

La pandemia ha puesto de relieve la importancia de las prácticas comerciales mundiales y la necesidad de garantizar que sean justas y equitativas. La COVID ha suscitado un renovado interés por los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que otorgan a las multinacionales farmacéuticas y compañías médicas privadas derechos de monopolio de las patentes. Estos monopolios permiten a las empresas restringir el suministro de bienes y servicios vitales, hacer subir los precios e incrementar los beneficios. La ISP ha estado haciendo campaña en favor de una exención de los ADPIC, que suspendería los derechos de monopolio en situaciones de emergencia sanitaria mundial. En octubre de 2020, Sudáfrica e India presentaron una propuesta a la OMC para que activara una exención temporal, que contó con el apoyo de más de 100 países. La ISP ha participado activamente en la campaña a favor de esta exención, junto con MSF,

Amnistía Internacional y los socios de la coalición Peoples Vaccine Alliance (Vacunas para la gente). La ISP ha desarrollado recursos para sus afiliadas, entre los que se incluyen folletos informativos sobre políticas, temas de debate, análisis de los mitos, respuestas y modelos de cartas, y ha analizado las posturas políticas de los gobiernos nacionales para ayudar a las afiliadas a ejercer presión.

La ISP ha estado trabajando con sus afiliadas de las distintas regiones para crear conciencia sobre los aspectos perjudiciales de los acuerdos comerciales y presionar a los gobiernos para que no los firmen. En mayo, la ISP celebró un foro en Nigeria en el que se debatieron distintas medidas de oposición a las cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) de los acuerdos comerciales. La ISP ha trabajado para oponerse al Tratado sobre la Carta de la Energía, que tiene fuertes normas relativas a la ISDS y cuenta con mecanismos que corren el riesgo de encerrarnos en políticas que dificultarán el logro de la justicia climática. La ISP ha previsto llevar a cabo acciones con sus afiliadas en Marruecos, donde el Gobierno

está inmerso en negociaciones de adhesión. Sin embargo, debido a la COVID, estos planes se han cancelado. La ISP también ha participado en campañas destinadas a impedir o ejercer presión sobre los países para que no firmen el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un megaacuerdo comercial inicialmente promovido por Estados Unidos.

La campaña en favor de la exención de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ha sido uno de los principales objetivos de la labor de la ISP desde octubre. La campaña ha conseguido aumentar notablemente el número de gobiernos que patrocinan y apoyan esta exención, cambiar el discurso de algunos gobiernos contrarios a ella y presionar a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos a fin de garantizar que todos los países tengan acceso a la vacuna. La exención ha sido apoyada públicamente por el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), expertxs en Derechos Humanos de la ONU, UNITAID, ONUSIDA, y 175 Premios Nobel y ex Jefes de Estado, entre ellxs Gordon Brown, François Hollande y Juan Manuel Santos. En el conjunto de la UE, 400 miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales firmaron un llamamiento conjunto en el que manifestaban su apoyo inequívoco a la exención.

A pesar de las diversas reuniones celebradas por el Consejo de los ADPIC, no ha sido posible llegar a un acuerdo, ya que un puñado de países del Norte Global, en particular la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, EE.UU. y Australia, que cuentan con grandes lobbies farmacéuticos nacionales, se oponen a ello. La ISP y sus afiliadas han participado activamente en una campaña nacional conjunta de la sociedad civil y los sindicatos que abogaba por la modificación de la legislación nacional con vistas a limitar el uso de las patentes en beneficio de la salud pública, que ha proporcionado a la campaña en favor de la exención de los ADPIC una base en los debates políticos nacionales. Las negociaciones han vuelto a caer en un punto muerto y es probable que se consiga una concesión sobre la Exención de los ADPIC a costa de las concesiones que hagan los países en desarrollo en otros ámbitos, como la ausencia de regulación de la economía digital o la desregulación de la prestación de servicios.

La ISP ha participado en la decimoquinta sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD 15) celebrada en Barbados. La labor de la ISP fue coordinada por la subregión y el Secretario Subregional para el Caribe representó a la ISP en el Grupo Internacional de Facilitación de la Sociedad Civil (ICSFG, por sus siglas en inglés). La ISP colaboró estrechamente con Our World Is Not For Sale

(Nuestro mundo no está en venta - OWINFS) en la coordinación de la acción de la sociedad civil y contó con una delegación de 8 personas. La ISP centró su trabajo en la propuesta de exención de los ADPIC, cuestiones comerciales y el papel de la UNCTAD, la crisis climática y la financiación de la lucha contra el cambio climático, la financiación para el desarrollo (FpD), y también en las cuestiones de la deuda, la reforma mundial de la fiscalidad de las empresas, la valoración del trabajo del cuidado y la reorganización social del cuidado, la justicia de género, la digitalización y la gobernanza de los datos. La ISP participó en el Foro de la Sociedad Civil, en el que representantes de la ISP intervinieron en las tres mesas redondas, y en el Foro sobre Comercio y Desarrollo, donde Helene Davis-Whyte (JALGO) participó como ponente en el Foro sobre Género y Desarrollo titulado “Underwriting economic exploitation: unpaid labour, care work, and social reproduction” (Suscribir la explotación económica: el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados y la reproducción social). La ISP escribió a todas las personas implicadas en las negociaciones para hacerles notar que el texto no critica la manera en la que el actual sistema multilateral de comercio inhibe, en lugar de facilitar, la capacidad de los países de regular en aras del interés público, crear empleo, garantizar la seguridad alimentaria y proteger la sostenibilidad medioambiental.

DIGITALIZACIÓN

No hace mucho, la ISP empezó a debatir el impacto de la digitalización en los servicios públicos y en los trabajadores de los servicios públicos, así como la necesidad de que los sindicatos se adapten a estos cambios. La ISP elaboró un informe, *Digitalización: Una guía de acción sindical para el trabajo y trabajadores de servicios públicos*, con el objetivo de ayudar a las afiliadas a comprender de qué manera la digitalización afecta a los servicios públicos y a los sindicatos de los servicios públicos. El informe esboza las formas que está adoptando la digitalización en diferentes sectores de los servicios públicos, cómo afecta a la prestación, la calidad y el acceso a los servicios, al empleo, las condiciones de trabajo y los derechos laborales.

Las investigaciones de la ISP revelan que la mayoría de las afiliadas no han negociado salvaguardias digitales en sus convenios colectivos. La ISP está recopilando actualmente un compendio de las mejores prácticas de los convenios colectivos del sector público para ayudar a las afiliadas en la negociación colectiva. El compendio proporcionará cláusulas de mejores prácticas y sus conclusiones se integrarán en un paquete de capacitación destinado a las afiliadas.

La ISP también trabaja con sus socios para promover el control comunitario de los datos y de los algoritmos que afectan a los servicios públicos y a la vida de los trabajadores del sector

público. La ISP encargó un documento, *Public Sector Workers in a Data-based Society* (Los trabajadores del sector público en una sociedad de datos), para entender mejor estas tendencias y el papel que desempeñan el Estado y los trabajadores del sector público.

Asimismo, la ISP elaboró un programa de formación de tres años destinado a fortalecer la capacidad de las afiliadas de entender los cambios derivados de la digitalización en la prestación de los servicios públicos y en el lugar de trabajo, y actuar al respecto. El programa proporciona herramientas concretas y recomendaciones prácticas para defender los derechos de los trabajadores y los servicios públicos, entre otras cosas a través de la negociación colectiva. Forma a tres grupos específicos en cada región: centros regionales autosuficientes de embajadores digitales, líderes sindicales, y delegados sindicales y personal del secretariado del sindicato.

Cada región de la ISP trazó un mapa del panorama digital correspondiente a sus afiliadas, que incluía la capacidad de estas, el estado de la tecnología digital y el grado de digitalización de los servicios públicos. La información se utiliza para adaptar la formación y los recursos a cada región.

La ISP ha llevado a cabo una serie de investigaciones que describen los riesgos y las oportunidades que se plantean para los sindicatos y los trabajadores

de los servicios públicos. En mayo, la ISP presentó el informe *Digitalización: Una guía de acción sindical para el trabajo y trabajadores de Servicios Públicos*, que sintetiza trabajos anteriores y presenta recursos y medidas que los sindicatos pueden adoptar para ayudar a su membresía a hacer frente a los retos de la digitalización. La ISP también está ultimando una base de datos en línea y un compendio de cláusulas de negociación colectiva sobre digitalización que las afiliadas podrán utilizar en sus negociaciones colectivas.

La ISP puso en marcha el proyecto *Nuestro futuro digital*, que refuerza la capacidad del personal y los activistas de las afiliadas de comprender los cambios relacionados con la digitalización en la prestación de servicios públicos y en el lugar de trabajo, y actuar al respecto. El proyecto consiste en un programa de capacitación de tres años que se impartirá en cada región entre 2021 y 2023 para desarrollar la capacidad de las afiliadas. El proyecto forma a tres grupos específicos en cada región: centros regionales autosuficientes de embajadores digitales, líderes sindicales, y delegados sindicales y personal del secretariado del sindicato.

La ISP está integrando la digitalización en otras áreas de trabajo, como el análisis de la digitalización en el sector de la salud, la digitalización y los jóvenes trabajadores, y la digitalización y el futuro del trabajo en los servicios públicos.

MIGRACIÓN Y REFUGIADXS

El año pasado, la pandemia de COVID-19 causó dificultades socioeconómicas, exacerbando la brecha entre ricos y pobres tanto dentro de los países como entre ellos. La lucha por lograr la equidad en la vacunación se ha convertido en una preocupación importante, ya que muchos grupos vulnerables, como las personas migrantes, refugiadas y desplazadas dentro de sus propios países, quedaron excluidos de la distribución nacional de vacunas y de los programas de vacunación. A pesar de la pandemia, la ISP ha proseguido su labor de forma virtual, participando en actividades mundiales de cabildeo, realizando análisis de políticas e investigaciones, y reforzando las actividades nacionales a través de proyectos.

La ISP ha participado activamente en los procesos regionales de revisión en línea del Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas, poniendo de relieve cuestiones clave como el trabajo decente, la contratación justa y ética, y los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Hemos resaltado la importancia del acceso de las personas migrantes a la protección social y a unos servicios públicos de calidad, así como del acceso a las vacunas. La ISP también ha colaborado con la Red de Migración de las Naciones Unidas a través de sus grupos de trabajo sobre el trabajo decente y los acuerdos bilaterales

de migración laboral, y sobre el acceso de los migrantes a los servicios básicos. A principios de año, la ISP participó en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo celebrado en línea, en el que dirigió la promoción de las asociaciones de competencias profesionales.

La ISP ha conmemorado el Día Internacional del Migrante poniendo de relieve la difícil situación en la que se encuentran los trabajadores de la salud y los cuidados migrantes, la mayoría de los cuales son mujeres. Lanzamos un nuevo informe político sobre la migración de los trabajadores de la salud, elaboramos una declaración y un vídeo para acompañar el informe, y trabajamos con la FSESP para emitir una declaración conjunta que ponía de relieve el enfoque de la migración basado en los derechos, anclado en la solidaridad, los derechos humanos y el tratamiento de las causas profundas. La ISP también ha puesto en marcha proyectos emblemáticos sobre los refugiados en la región de Oriente Medio y Norte de África, y sobre los desplazados internos en Nigeria.

La ISP ha participado en actividades de cabildeo, creación de redes y el establecimiento de alianzas a nivel mundial en el marco del Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas, y sigue promoviendo el acceso universal y no discriminatorio a las vacunas para las personas refugiadas y migrantes. También

hemos colaborado con un nuevo socio, la Open University del Reino Unido, en trabajos relacionados con la gobernanza de la migración en el ámbito de la salud, lanzando una encuesta sobre el impacto de la COVID-19 en los trabajadores de la salud migrantes y organizando un seminario web interactivo de formación destinado a las afiliadas del sector de la salud.

Los sindicatos de la ISP han estado fortaleciendo la capacidad de su membresía con respecto a la cuestión de los desplazamientos internos, habida cuenta de que los conflictos y los desastres climáticos son la causa principal de desplazamiento forzoso en todo el mundo. La ISP ha seguido ampliando su labor en materia de migración y movilidad de los trabajadores de la salud, tanto en el ámbito de la política mundial como con respecto a la capacitación de sus afiliadas a escala nacional. También hemos ampliado su labor en materia de migración climática, comenzando con un seminario web y la presentación del Documento de la ISP sobre la migración climática relacionado con la política y los proyectos climáticos de la ISP. Por último, la ISP ha colaborado con la Red de Migración de las Naciones Unidas en el seguimiento de la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración, que ha incluido su participación en el primer examen mundial, el Foro de Examen de la Migración Internacional.

CRISIS CLIMÁTICA

La ISP amplió las herramientas de sensibilización de sus afiliadas, contribuyó a las actividades de cabildeo mundial y regional en favor de las políticas que las personas y el planeta necesitan urgentemente, y examinó diversos mecanismos de financiación de la lucha contra el cambio climático para garantizar que no hubiera privatizaciones ocultas ni otras políticas perjudiciales. La Agencia Internacional de la Energía publicó su Informe Mundial sobre la Energía 2021, que mostraba el inminente crecimiento del uso carbón, el petróleo y el gas natural, lo que conducirá inevitablemente a un aumento de los gases de efecto invernadero y a un empeoramiento de la crisis climática. La Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, se organizó como una reunión híbrida, lo que limitó la participación de la sociedad civil. Los sindicatos de la ISP, con la ayuda de las organizaciones de apoyo solidario UtoU, de Suecia, y SASK, de Finlandia, trabajaron para influir en el contenido de los Compromisos Determinados a Nivel Nacional presentados por las 197 partes del organismo de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC). Algunos gobiernos se mostraron abiertos a incluir a los sindicatos en la formulación de los compromisos nacionales, mientras que otros trabajaron a través de sus confederaciones nacionales o por sectores, e incluso con los ministerios nacionales. Los sindicatos necesitan disponer de un mejor análisis y de más actividades de capacitación y movilización para su membresía, y

también deben forjar coaliciones en sus países con otros grupos que trabajen sobre el clima, con el fin de que las cuestiones laborales se integren en reivindicaciones climáticas más amplias.

Varias OSC crearon el Acuerdo de Glasgow: El compromiso climático de los Pueblos, en el que evaluaron el fracaso que había supuesto no resolver la crisis climática durante más de 25 años y, dado el escaso margen para evitar una calamidad mundial, exigieron medidas drásticas. La pandemia, que se apoderó del planeta durante más de un año, paralizó países y mató a millones de personas, puso de manifiesto los peligros que conlleva ignorar los límites naturales en la constante expansión de la humanidad. Sin embargo, también demostró que los gobiernos eran capaces de adoptar medidas rápidas y de gran alcance, asignando enormes presupuestos, fijando objetivos de producción para la industria, desarrollando fondos de protección social para trabajadores y empleadores, y abordando graves problemas sociales.

A medida que los países salían del bloqueo provocado por la pandemia y reactivaban sus economías, los gobiernos necesitaban establecer normas de emisión más estrictas. El gran reto de la negociación en la COP26 fue el artículo 6, la última sección del Acuerdo de París que quedaba por resolver. La ISP examinó los diversos mecanismos de financiación de la lucha contra el cambio climático para asegurarse de que no hubiera privatizaciones ocultas u otras políticas

perjudiciales. La financiación de la lucha contra el cambio climático seguía siendo un grave problema, ya que los fondos prometidos no se habían materializado, los planes de financiación de la lucha contra el cambio climático imponían más privatización y financiarización, y la financiación de la lucha contra el cambio climático no reconocía las cuestiones de “pérdidas y daños”, en virtud de las cuales los países ricos debían pagar por la riqueza histórica generada con la emisión de gases de efecto invernadero. Otras cuestiones financieras sin resolver eran la cantidad y el tipo de financiación (préstamos o subvenciones) disponibles para la mitigación (reducción de emisiones) o la adaptación. Muchos países del Sur emitían pocos gases de efecto invernadero, pero necesitaban muchas inversiones para que sus países pudieran adaptarse a fenómenos climáticos más frecuentes e intensos. Confiar en los mecanismos de seguros comerciales resultaba insuficiente.

La base del Acuerdo de París fueron los Compromisos Determinados a Nivel Nacional voluntarios y no vinculantes presentados por las 197 partes del organismo de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC). Los Compromisos Determinados a Nivel Nacional actuales supondrían un aumento de la temperatura global de unos 3 °C. Algunos países han asumido compromisos ambiciosos, pero no han dado muchos detalles sobre el modo de cumplirlos. Faltan medidas a corto plazo. Las empresas no estuvieron incluidas en este proceso, pero deberían estarlo.

Derechos sindicales

- INCLUIDAS LA CIT, LAS ACCIONES DE SOLIDARIDAD Y LAS CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD

Se siguió observando el impacto negativo de la crisis de COVID-19 sobre los derechos de lxs trabajadores y los derechos sindicales. Muchos países aplicaron medidas sin haber realizado consultas adecuadas o sin haberlas realizado en absoluto, lo que dio lugar a un claro patrón de restricciones que violaban las libertades civiles y los derechos sindicales.

La ISP participó en la 341^a reunión en línea del Consejo de Administración de la OIT, celebrada en marzo, en la que se debatieron diversas cuestiones. El Consejo de Administración decidió el formato de la siguiente reunión de la CIT, el calendario de las medidas que debían adoptarse para la elección del Director General y el calendario de las reuniones sectoriales tanto para lo que quedaba del bienio 2020-2021 como para el bienio 2022-2023. La ISP también participó en la reunión

técnica sobre el futuro del trabajo en el sector de la educación en el contexto del aprendizaje permanente para todxs, las competencias y el Programa de Trabajo Decente.

En enero, la ISP y otras FSI celebraron una pequeña concentración en apoyo del Sindicato Independiente de Bielorrusia, ya que muchxs sindicalistas y activistas habían sido reprimidxs y detenidxs desde las elecciones presidenciales celebradas un año antes por participar en manifestaciones pacíficas contra el gobierno.

Gracias a una campaña internacional iniciada por la ISP, sindicatos de todo el mundo reclamaron al gobierno argelino la liberación de Dalila Touat y Namia Abdelkader, y el fin a la persecución de las mujeres sindicalistas y activistas. Las dos activistas fueron puestas en

libertad y sometidas a supervisión judicial: el juicio de Dalila Touat fue aplazado, mientras que Namia Abdelkader fue absuelta en su nuevo juicio.

La ISP y sus afiliadas presentaron en nombre del pueblo Shuar Arutam una queja ante la OIT por el incumplimiento del Convenio núm. 169 en relación con la ejecución de los proyectos mineros San Carlos-Pantanza y Warintza. La ISP envió una carta al nuevo gobierno en la que le solicitaba que diera respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT y se ocupara de otras cuestiones de larga data relativas a violaciones laborales en el sector público. El Comité de Libertad Sindical de la OIT emitió recomendaciones sobre los casos núm. 3347 y núm. 3367 relativos a la discriminación antisindical contra la membresía de ANERCIC y ASPAE.

George Poe Williams, Secretario General de NAHWAL, se vio obligado a prolongar su estancia en Alemania, mientras otrxs dirigentes de Liberia seguían permaneciendo escondidxs. La situación se mantuvo tensa, y George se trasladó a Ghana con el apoyo de la ISP y sus afiliadas, a la espera de que las condiciones fueran más favorables para poder regresar a Liberia.

La ISP participó en la primera parte de la 109^a CIT en junio, que se desarrolló en línea, con restricciones por razones de conectividad, horarios y debido al diseño de su orden del día. Lxs trabajadores sufrieron una vez más el embate de lxs empleadores, que tratan de debilitar los órganos de control de la OIT y discrepan en cada uno de los debates en una estrategia de presión para alcanzar declaraciones y conclusiones de escaso contenido, acríticas e inocuas.

En octubre, la ISP participó en la 7^a sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de

composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, que debatió el tercer proyecto revisado de instrumento jurídicamente vinculante. En septiembre, la ISP se unió a los debates del Grupo de trabajo de la TUAC sobre empresas multinacionales acerca de la aplicación de las Directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales.

La ISP y sus afiliadas presentaron una opinión escrita a la “Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH) con respecto a la opinión consultiva para interpretar y determinar “el alcance de las obligaciones de los Estados, bajo el sistema interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género”.

También en octubre, la CSI celebró su Reunión Jurídica Mundial, en la que se revisó el Tercer Borrador del instrumento jurídicamente vinculante, antes

de la 7^a sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG, por sus siglas en inglés), y se debatieron los avances relativos a la legislación sobre diligencia debida en materia de derechos humanos a escala de la UE y entre los Estados miembros de la UE.

En coordinación con IndustriALL y UITA, la ISP solicitó la intervención urgente de la OIT y presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) en relación con la detención de Ramzi Derder, miembro de la oficina nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Informales. En noviembre, la ISP fue invitada a participar en el panel sobre “Diligencia debida y planes de acción nacionales”, durante el 8^o Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresas, organizado por el Centro de Derechos Humanos y Empresas de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Juiz de Fora.

SERVICIOS PÚBLICOS

DE DISTRIBUCIÓN

La pandemia ha puesto de relieve la importancia de los servicios públicos, pero también ha renovado el interés por las políticas de austeridad. A pesar de que el FMI anima a los países ricos a invertir más en infraestructuras públicas, los países prestatarios se ven obligados a vender activos públicos para tener acceso a los préstamos del FMI. La propuesta en materia de infraestructuras del Presidente Biden amplía la definición de infraestructuras para incluir las infraestructuras sociales como las viviendas asequibles y los servicios de la salud, y avanza hacia una economía verde. Sin embargo, la ampliación de la definición de infraestructura pública no debe conllevar una mayor privatización de los servicios esenciales.

En el sector de la energía, la conversión hacia las energías renovables bajas en emisiones de carbono sigue obstaculizada por el poder de las empresas con ánimo de lucro. Las inversiones privadas destinadas a las energías renovables son demasiado escasas para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima. La ISP apoya a Sindicatos por la Democracia Energética y está trabajando con las ONG afiliadas con el fin de desarrollar una base política para los sistemas públicos de energía bajos en emisiones de carbono. La ISP también participa en las actividades de sensibilización y movilización en materia de política energética y está recopilando relatos procedentes de distintos

países sobre la expansión de las energías renovables por parte de los servicios públicos de distribución.

En el sector del agua y el saneamiento, los fondos públicos siguen siendo insuficientes para garantizar el acceso universal en el marco de los ODS. Recurrir a una financiación innovadora en la que se utilicen fondos públicos para atraer inversiones privadas sigue siendo una utopía. La ISP apoya las campañas contra la privatización que tienen lugar en África, así como las que llevan a cabo los sindicatos del agua y la energía de Brasil contra la campaña de privatización masiva de Bolsonaro. La ISP también forma parte de la Asociación Mundial de Operadores de Agua (GWOPA) y cuenta con dos asientos en el comité directivo.

La infraestructura eléctrica de Puerto Rico fue devastada por el huracán María en 2017 y el gobierno estadounidense impuso la privatización, lo que debilitó aún más el servicio de distribución. La ISP apoya los esfuerzos de campaña de UTIER, el sindicato que representa a los trabajadores del sector energético. Los sindicatos de la energía de Indonesia se han unido en el marco del proyecto de la ISP auspiciado por SASK para recobrar fuerzas y contrarrestar una nueva oleada de privatizaciones. La privatización de la energía en Nigeria, respaldada por el Banco Mundial, ha resultado ser un gran fracaso. Los sindicatos se

están movilizando para frenar la injustificada subida de los precios y revertir la privatización.

Los sindicatos de África y sus aliados celebraron en octubre una semana de actividades contra la privatización del agua. La ISP formó parte de la mesa redonda de apertura del 4º Congreso de la Asociación Mundial de Operadores de Agua, y las afiliadas participaron en sesiones específicas. Las Naciones Unidas celebrarán su segunda cumbre mundial sobre el agua en marzo de 2023 para evaluar los progresos realizados a medio camino del plazo de 2030 establecido para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. La ISP se está preparando para la Cumbre de la ONU sobre el Agua, apoyando a las afiliadas africanas en el desarrollo de una red y campañas continentales sobre el agua, y respaldando a los sindicatos de la energía en sus campañas a favor de la energía pública renovable.

La ISP es consciente de los retos y las oportunidades que se presentan en el sector de los servicios de distribución, especialmente a la luz del impacto de la pandemia en los servicios públicos y de la urgente necesidad de una transición ecológica. La ISP trabaja activamente con ONG, sindicatos de la energía y el agua afiliados, y sus aliados para sentar las bases políticas de los sistemas públicos de distribución de energía con bajas emisiones de carbono y contrarrestar las campañas de privatización.

EMPRESAS MULTINACIONALES

La ISP tiene actualmente tres Acuerdos Marco Mundiales (AMM) con empresas multinacionales (EMN). Los AMM son un instrumento destinado a la ISP y a las afiliadas de todo el mundo con miembros en empresas multinacionales para que aumenten su afiliación, defiendan los derechos de su membresía y mejoren las condiciones de trabajo.

- 1. Grupo EDF** - El actual plan de reestructuración conocido como “Hércules” se aplazó indefinidamente. Todos los sindicatos franceses representativos se opusieron continuamente a este plan de desagregar y privatizar la generación y distribución de la energía en Francia, entre otras cosas organizando reuniones informativas en las comunidades, con representantes locales electos y realizando una intensa campaña en los medios sociales para reclamar que la energía siguiera siendo un servicio público, y proclamaron su victoria en agosto cuando el proyecto Hércules fue suspendido. En marzo, EDF respondió a la carta de Rosa Pavanelli quien había solicitado aclaraciones sobre sus actividades empresariales en Myanmar en el contexto del golpe militar. La carta confirmó que las actividades en curso de EDF en Myanmar estaban suspendidas. En julio, la ISP participó en las reuniones plenarias del Comité de Seguimiento del AMM de EDF, en las que se confirmó que firmaríamos un acuerdo para prorrogar el AMM durante 2 años.
- 2. ENGIE** - Las afiliadas de la ISP siguieron luchando activamente contra el plan de reestructuración de Engie, que podía implicar la venta de unidades que empleaban a un total

de 60.000 trabajadores en todo el mundo. En junio se celebró la 6^a reunión de negociación para renovar el AMM. Se estaba cerca de finalizar este AMM. En julio se celebró una reunión de diálogo social de alto nivel con el nuevo Director General de Engie.

- 3. ENEL** - Se celebró una reunión con las afiliadas italianas para definir las propuestas relativas a la renovación del AMM. Las propuestas se enviaron posteriormente a la dirección, y quedamos a la espera de una respuesta. Las afiliadas brasileñas informaron a la ISP de que ENEL había cortado el suministro de energía a unas 2.500 familias que vivían en una ocupación en São Paulo, Brasil. La ISP escribió una carta de solidaridad conjuntamente con las afiliadas italianas e IndustriALL. La ISP no recibió respuesta.
- 4. Fresenius** - La ISP siguió trabajando para fortalecer la Alianza Sindical Global Fresenius. La ISP participó en reuniones con la dirección mundial, apoyó las intervenciones de los accionistas en la Asamblea General Anual de Fresenius y coorganizó la reunión de la Alianza Global en octubre. La dirección siguió negándose a emprender negociaciones para crear un AMM.

GOBIERNO LOCAL Y REGIONAL/MUNICIPALES

La ISP organizó las [“Series LRGNext 2021”](#), un ciclo de consultas temáticas en línea con su membresía y aliados de los gobiernos locales y regionales (GLR). Las consultas proporcionaron un espacio político inclusivo para que todas las afiliadas de los GLR de las distintas regiones debatieran cuestiones candentes de la política del sector, aprovechando las nuevas herramientas digitales disponibles, ya que la celebración de la Conferencia Mundial de los GLR de 2021 no fue posible debido a la COVID. Este proceso también sirvió para hacer balance de la [labor realizada por la ISP en el ámbito de los GLR desde 2016](#) y brindó la oportunidad de implicar a la membresía mundial de la ISP del ámbito de los GLR en las prioridades políticas compartidas antes del Congreso de la ISP. Las Series LRGNext 2021 se celebraron del 15 de septiembre de 2021 al 3 de diciembre de 2021. Cada sesión se centró en dos temas clave de los GLR, acompañados de [10 documentos políticos de debate](#) (megatendencias, financiación, digitalización, remunicipalización, gobernanza democrática, derechos sindicales, género e interseccionalidad, servicios del cuidado territoriales, clima y medio ambiente), [vídeos de recursos](#) y una [galería de retratos de las profesiones de lxs trabajadores de los GLR](#). El proceso dio lugar al [Plan](#)

de Acción 2022-2027 de la Red Mundial de GLR de la ISP [“Construir el futuro de los servicios públicos locales”](#). En 2021, la ISP avanzó sustancialmente en el diálogo social mundial y regional con las organizaciones de empleadores de los GLR. La Secretaría General de CGLU, Emilia Saiz, intervino por primera vez en el CE de mayo para abordar la dimensión del cuidado en el ámbito de los GLR. La Región de África y los Países Árabes de la ISP y CGLU África firmaron y [presentaron en un debate público](#) en línea un Memorando de Entendimiento para el diálogo y la cooperación centrado en los Servicios Públicos Locales de Calidad y el Trabajo Decente, un primer acuerdo de diálogo social regional en el sector de los GLR que iba más allá del acuerdo FSESP-CEMR para la región europea. La ISP también fue invitada a redactar un [documento de trabajo sobre la conexión entre los servicios públicos y la igualdad](#) para la VI edición de la emblemática publicación bianual de CGLU “GOLD VI” como aportación al Congreso Mundial de CGLU de 2022. En el documento, la ISP promueve la remunicipalización/internalización como una poderosa opción política para que las autoridades locales luchen contra las desigualdades territoriales.

Con motivo del Día Mundial de las Ciudades 2022, la ISP difundió un [editorial y carteles](#) en los que se ponía de relieve el valor inestimable de los servicios vitales que prestan cada día lxs trabajadores de los GLR, que contrasta con su sistemática falta de financiación.

La ISP también presionó para dar una mayor visibilidad y reconocimiento a lxs trabajadores de los GLR en la OIT. La ISP y la ITF participaron en la Delegación de lxs Trabajadores y en la Secretaría de la Reunión Técnica Tripartita de la OIT sobre el Futuro del Trabajo Decente y Sostenible en los Servicios de Transporte Urbano, en la que la ISP ejerció presión para que el transporte urbano recibiera un enfoque y una redacción de carácter pro-público, que incluyera un enfoque del servicio global y del gobierno en su conjunto, integral con respecto al acceso al empleo y a otros servicios públicos vitales y para garantizar la continuidad rural-urbana. Las conclusiones tripartitas reflejan este enfoque, pero la referencia a la remunicipalización se perdió debido a la intransigente oposición del Grupo de los Empleadores. Se completó el primer Estudio regional de la OIT sobre las condiciones de trabajo de lxs trabajadores de los gobiernos subregionales en América Latina.

— REMUNICIPALIZACIÓN

La ISP se unió a la Universidad de Glasgow y al Transnational Institute (TNI) en el lanzamiento de [Public Futures](#), la única base de datos mundial existente sobre la remunicipalización y la desprivatización.

La ISP también publicó una guía sobre la remunicipalización destinada a lxs trabajadores y sus sindicatos titulada “[Devolver nuestros servicios públicos a manos públicas - Una guía sobre la remunicipalización para lxs trabajadores y los sindicatos](#)”. En el marco de la Reunión Técnica [Tripartita de la OIT sobre el Futuro del Trabajo Decente y Sostenible en los Servicios de Transporte Urbano](#), la ISP y la ITF consiguieron que se hiciera oficialmente referencia a la “remunicipalización” en el [informe de antecedentes de la OIT](#) para la reunión, una de las primeras en un documento oficial de las Naciones Unidas (pág. 10). Sin embargo, la referencia se perdió en las conclusiones tripartitas debido a la intransigente oposición del grupo de lxs trabajadores.

La ISP redactó dos contribuciones para el Informe “En el punto de mira del desarrollo sostenible” de 2021 con los títulos “[Challenging decades of privatization and de-funding of public services](#)” [Desafiando décadas de privatización y desfinanciación de los servicios públicos] y “[Now is the time to reclaim public services](#)” [Ha llegado el momento de reivindicar los servicios públicos], en las que se analizan experiencias de los procesos de desprivatización impulsados por la crisis de la COVID.

La ISP lanzó un “[Grupo de Trabajo Sindical para un Futuro Energético Público](#)” junto con [los Sindicatos por la Democracia Energética \(TUED\)](#) y la afiliada francesa FMNE-CGT. El grupo de trabajo incluye a muchas afiliadas de la ISP y de TUED que defienden el carácter público de la energía y tienen como objetivo elaborar un programa político destinado a lograr una descarbonización impulsada por el sector público, hacer frente a la crisis climática y reivindicar la energía como servicio público.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Y LXS FUNCIONARIXS

INTERNACIONALES

En abril de 2021, el Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA, por sus siglas en inglés) celebró su 20^a sesión sobre el tema “Creación de instituciones inclusivas, eficaces y resilientes para la recuperación sostenible tras la COVID-19 y la implementación de los ODS”. La sesión se distanció del modelo empresarial de gobernanza y reconoció que la eficiencia y el coste no son las únicas medidas del rendimiento.

La ISP participó en el Foro Mundial de la OCDE Anticorrupción e integridad en marzo de 2021, en el que lxs participantes debatieron sobre los nuevos indicadores de integridad pública, los flujos financieros ilícitos, la participación del Estado en el sector empresarial y otras cuestiones. En octubre de 2021, la ISP asistió a la Conferencia de la OCDE “Gobierno más allá de la recuperación: hacia un sector público preparado para el futuro” (en línea), en la que se abordaron diversas cuestiones relativas al futuro del sector público, entre ellas la regulación y la innovación.

La ISP también participó en las reuniones 55^a y 56^a del Comité Permanente de Administración Nacional y Europea (NEA) de la FSESP. La ISP envió una carta al Secretario General de la ONU en relación con el “Futuro de la fuerza de trabajo del sistema de las Naciones Unidas”, informe elaborado bajo la dirección del Director General de la OIT. La Secretaría General de la ISP fue entrevistada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas sobre el papel desempeñado por lxs funcionarixs públicxs durante el año anterior de pandemia. Asimismo, en su número de junio, la revista de las Naciones Unidas UN Today publicó un artículo del responsable de la administración nacional de la ISP sobre la reforma de las Naciones Unidas.

De cara al futuro, la 21^a Sesión del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA) de las Naciones Unidas se fijó para abril de 2022.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LXS INFORMANTES

Durante 2021, los órganos consultivos sectoriales de la Organización Internacional del Trabajo se reunieron para debatir una propuesta de celebrar una reunión tripartita de expertxs, que incluyera una “Reunión técnica sobre la protección de lxs informantes de irregularidades en el sector de los servicios públicos” a principios de 2022. En apoyo de lxs informantes, la ISP se unió a una campaña que pedía la anulación del proceso judicial viciado contra los Sres. Navy Malela y Gradi Koko, condenados a muerte en rebeldía en la República Democrática del Congo por denunciar la corrupción de la que fueron testigos mientras trabajaban en el Afriland Bank. La ISP también organizó un seminario de dos días sobre la protección de lxs informantes en la subregión del Caribe, que contó con el apoyo de la Red Internacional de Denunciantes y el respaldo financiero de FÓRSA, Irlanda.

En junio de 2021, las Naciones Unidas celebraron su primera sesión especial de la Asamblea

General contra la corrupción, en la que los Estados miembros de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptaron una Declaración Política con la que se comprometían a adoptar medidas para hacer frente a la corrupción, como la prevención, la penalización, la recuperación de activos y la cooperación. Posteriormente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) celebró en abril de 2022 el Foro Mundial contra la Corrupción y por la Integridad.

En general, en 2021 se prestó especial atención a la protección de lxs informantes y a la lucha contra la corrupción mediante diversos actos y campañas. Estos esfuerzos pretendían anular procesos judiciales viciados, elogiar a lxs informantes por sus acciones y adoptar medidas para protegerlxs a ellxs y a sus familias de cualquier represalia.

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

En el sector de la salud, la pandemia de COVID-19 siguió siendo una preocupación central. La financiación de los servicios de salud pública y la equidad en materia de vacunas fueron cuestiones polémicas. La ISP aportó su contribución a la revisión de Trabajar en pro de la salud: plan de acción quinquenal para el empleo en el ámbito de la salud y el crecimiento económico inclusivo (2017-2021). La insuficiente asimilación de la visión del Plan y de las recomendaciones de la anterior Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y Crecimiento Económico fue motivo de preocupación. La ISP solicitó que la 74^a Asamblea Mundial de la Salud (74 AMS), celebrada en mayo, ampliara la duración del Plan y el compromiso político de los gobiernos. La ISP participó en la 148^a reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pidió una exención de los derechos de propiedad intelectual para permitir la ampliación de la producción de las vacunas contra la COVID-19, los tratamientos terapéuticos y

otras tecnologías. La ISP también pidió que se reforzara y finanziara adecuadamente la sanidad y el cuidado de carácter público para garantizar la seguridad de los pacientes y la cobertura médica universal, así como medidas para salvaguardar la vida y el bienestar de los trabajadores de la salud en las emergencias públicas.

En 2021, Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistencia, la ISP colaboró en un estudio sobre el estado del empleo y las condiciones de trabajo en el sector. La ISP aportó su contribución al grupo de desarrollo de las orientaciones provisionales “OMS. COVID-19: Salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores de la salud”, que publicó una actualización de las orientaciones provisionales de la OMS difundidas en marzo de 2020. Las orientaciones incluyeron cláusulas sobre la gestión de la carga de trabajo, la violencia y el acoso, y amplió los puntos relativos a las responsabilidades de los empleadores y las autoridades nacionales. La ISP participó en el proceso de elaboración de una resolución sobre un

tratado relativo a la preparación frente a las pandemias, que fue presentada ante la 74^a Asamblea Mundial de la Salud. La ISP pidió que se incluyera una financiación adecuada del sistema de salud pública, la mejora del empleo de la salud y que se antepusiera claramente la salud a la riqueza en situaciones de pandemia (incluida la suspensión de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, los medicamentos y la tecnología).

En el marco de la Presidencia italiana del G20, el 21 de mayo de 2021 se celebró una Cumbre Mundial de la Salud. La Secretaría General de la ISP representó al movimiento sindical mundial en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Salud previa a la Cumbre. La ISP pidió que se finanziaran los sistemas de salud pública universales, que se subsanara la escasez mundial de personal de la salud, que se renunciara a las patentes y que se integraran los servicios de cuidado en unos sistemas de la salud y el cuidado dotados de recursos suficientes. La ISP elaboró un informe que resumía y analizaba el Estudio General de la OIT 2021-2022 en lo

que respecta al Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) y la Recomendación sobre el personal de enfermería (núm. 157). Se organizó una consulta en línea con las afiliadas del sector a través de seminarios web regionales en marzo y abril, que enriqueció las respuestas de las afiliadas de la ISP a la encuesta. La ISP participó en la planificación del Día de Acción Mundial de lxs Trabajadores del Cuidado. El Grupo de Trabajo sobre los Servicios Sociales y de la Salud se reunió en julio para aportar ideas sobre los problemas de las afiliadas del sector y elaborar estrategias de intervención.

La ISP participó activamente en la 74^a Asamblea Mundial de la Salud y abogó por la exención de los ADPIC como medio fundamental para garantizar la equidad en materia de vacunas, la protección adecuada de lxs trabajadores de la salud y el cuidado, y advertir contra la creciente influencia de las fundaciones filantrópicas a la hora de impulsar la política y el programa de inversiones en materia de salud. La ISP contribuyó al discurso político sobre la financiación de la sanidad y al enfoque “Una sola salud” en el seminario web de Civil 20 (C20). La ISP también contribuyó al proceso de evaluación comparativa de

los resultados en materia de salud mental de la OCDE, donde pidió que se tuvieran más en cuenta los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y la precariedad laboral en el enfoque multisectorial integrado de la evaluación comparativa. La ISP respondió al Estudio general de la OIT relativo al Convenio sobre el personal de enfermería (C149) y la Recomendación sobre el personal de enfermería (R157) con recomendaciones que había preparado con las afiliadas. La ISP contribuyó a la cartografía del sector de la salud y los servicios sociales con el Transnational Institute y a la cartografía de la incursión de los organismos multisectoriales en la gobernanza mundial con varias otras OSC.

La ISP participó en la planificación del Día de Acción Mundial a favor del cuidado para dejar constancia de la posición hegemónica que ocupa en el sector. La labor de la ISP en el seno de la coalición Peoples Vaccine Alliance (Vacunas para la gente).se intensificó durante este periodo. El Grupo de Investigación y Acción contra la privatización de la salud, del que se informó al CE-156, se transformó en el Consorcio contra la Comercialización de la Salud. En colaboración con las OSC que integran dicho Consorcio, la ISP se hizo cargo del informe de un

grupo consultivo de la OMS sobre la estrategia de participación del sector privado.

El Plan de Acción “Trabajar para la Salud” de la OMS ha avanzado poco. La ISP pide que la Sesión Especial de la Asamblea Mundial de la Salud amplíe la duración del Plan. La labor de la ISP en el Grupo de Desarrollo de Orientaciones para la Prevención y el Control de Infecciones de la OMS en el marco de la COVID-19 dio lugar a una revisión de las recomendaciones de las orientaciones relativas al uso de las mascarillas y los respiradores para lxs trabajadores de la salud. La ISP contribuyó a elaborar una Guía mundial para los Programas de Salud y Seguridad en el Trabajo, que pone en práctica las orientaciones provisionales “OMS. COVID-19: Salud y seguridad en el trabajo para lxs trabajadores de la salud”. La ISP contribuyó al discurso político sobre la financiación de la salud y el enfoque “Una sola salud” en el seminario web Civil 20 (C20). La ISP respondió al Estudio general de la OIT sobre el Convenio relativo al personal de enfermería (C149) y la Recomendación sobre el personal de enfermería (R157) con recomendaciones preparadas con las afiliadas.

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En 2021, la Red del personal auxiliar de la educación y la cultura se centró en los retos a los que se enfrentan lxs trabajadores de estos sectores debido a la pandemia. La red presentó un manifiesto de lxs trabajadores del sector de apoyo a la educación a la Directora de Políticas Sectoriales de la OIT, Sra. Alette van Leur, y un manifiesto de lxs trabajadores de la cultura al Subdirector General de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone. El trabajo de la red se resumió en dos de sus tres reuniones del año.

Durante la primera reunión, celebrada en abril, la red debatió el acceso universal a las vacunas y el apoyo a la exención de los ADPIC. El punto culminante de la reunión fue la presentación y aprobación del Manifiesto de lxs Trabajadores de la Cultura, que se entregó al Subsecretario General de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone. En la reunión también se debatieron los proyectos de digitalización, la lucha contra la privatización y la reconstrucción de la organización social del cuidado.

En la segunda reunión, celebrada en septiembre, Marcelo di Stefano expuso la necesidad de preparar la Conferencia Mundial de Educación Superior de la

UNESCO. Lxs ponentes invitados Ana Lucia Gazzola y Telemaco Talavera hicieron un llamamiento a la unidad para poner de relieve los problemas críticos a los que se enfrentan lxs trabajadores de apoyo a la educación en la enseñanza superior. Rebeca Logan, de la Internacional de la Educación, explicó la participación prevista de la IE en la cumbre sobre el clima COP26, y Lauren Samet, Directora del Departamento de Personal Paraprofesional y demás Personal relacionado con la Escuela de la AFT, presentó las herramientas del sindicato en materia de Dignidad y Respeto. Rob Weil, de AFT, destacó el impacto potencial de la inteligencia artificial en lxs trabajadores de la educación y pidió una mayor participación sindical en las decisiones relacionadas con la IA.

La última reunión de la Red del personal auxiliar de la educación y la cultura tuvo lugar en diciembre. El orden del día incluyó la preparación de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, el trabajo con la Internacional de la Educación, el debate sobre cuestiones de justicia climática y un informe sobre el esfuerzo continuo para conseguir el acceso universal a las vacunas.

COMUNICACIONES Y CAMPAÑAS

En el departamento de comunicación, nos coordinamos con diversos socios y aliados para promover una recuperación que beneficie a lxs trabajadores. Colaboramos con Action Aid para publicar una investigación que denunciaba la recomendación del FMI de recortar la financiación del empleo público en países con escasez de personal de la salud. Con la Red para la Justicia Fiscal, creamos un Museo en línea dedicado al personal de enfermería que se pierde con el fin de poner de relieve los costes que tiene la evasión fiscal de las empresas en el ámbito de la salud. Nos unimos a la campaña Hacer que Amazon pague con la Internacional Progresista y trabajamos con Amnistía Internacional para trazar un mapa de lxs trabajadores de la salud que murieron o están luchando contra la COVID-19 en primera línea.

Además, trabajamos en un documental interactivo en línea titulado “Detrás de la Máscara” con el apoyo de Union2Union, Suecia. El documental presenta las experiencias de lxs trabajadores de primera línea de todo el mundo durante la pandemia de COVID y tiene por objeto vincular las luchas

personales con los cambios necesarios en materia de políticas públicas para construir unos servicios públicos más resilientes. Terminamos el rodaje en Zimbabue y desarrollamos las historias de lxs trabajadores de Brasil, Pakistán y Túnez. También renovamos nuestra plataforma de campaña, El pueblo por encima del lucro, y actualizamos el boletín del Observatorio de la privatización (Privatization Watch).

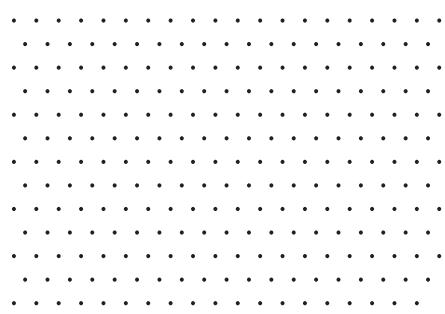
Publicamos una serie de vídeos en los que intervienen trabajadores de primera línea que debaten cuestiones como la exención de las patentes de las vacunas por parte de la OMC, la revalorización del trabajo del cuidado, el derecho al agua y la solidaridad con las afiliadas tras la explosión de Beirut. Además, contribuimos a la identidad visual de la Serie de consultas en línea de la red de los GLR 2021 de la ISP, LRGNext. También contribuimos al Día Mundial de Acción a favor del Cuidado colaborando en el lanzamiento de una publicación, una serie de vídeos y un podcast.

Contribuimos a la participación de la Agrupación Global Unions en la Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, entre otras cosas creando y gestionando un blog conjunto. Planeamos seguir contribuyendo a la participación de la Agrupación Global Unions en la UNCSW66.

También empezamos a rediseñar los informes de comunicación relativos a los proyectos de desarrollo sindical de la ISP, creando una nueva sección dedicada a los proyectos de desarrollo sindical en el sitio web. También iniciamos una colaboración con la revista ROAR para la producción de una serie de artículos destinados a enmarcar una selección de proyectos en el contexto mundial de la lucha sindical.

En general, trabajamos en la coordinación con diversos socios y aliados, la creación de contenidos como documentales y vídeos en línea, y la contribución a diversos proyectos y eventos destinados a promover los servicios públicos y los derechos de lxs trabajadores.



PROMOVER LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD

En marzo de 2021, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (UNCSW65) celebró su reunión anual bajo el lema “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”. Debido al carácter virtual del evento, la participación de la sociedad civil fue limitada y solo pudieron asistir a las reuniones oficiales las delegaciones gubernamentales de los países de las Naciones Unidas con sede en Nueva York. A pesar de ello, la ISP estuvo representada por una delegación de 60 miembros procedentes de sus sindicatos afiliados en las cuatro regiones, que participaron activamente y presentaron informes al Blog de la CSW.

La ISP declaró que había llegado el momento de una “nueva normalidad” en materia de igualdad de género para acelerar el progreso en la consecución de las promesas consagradas en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agrupación Global Unions hizo un llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que dieran prioridad e invirtieran urgentemente en un nuevo contrato social en materia de igualdad de género, el derecho humano al cuidado y la construcción de una economía del cuidado, un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y en la igualdad y la equidad en la toma de decisiones y el liderazgo. La ISP organizó un acto paralelo sobre la “Reconstrucción de la organización social del cuidado”, en el que los organizadores hicieron un llamamiento mundial de adhesión a un Manifiesto que tenía por objeto crear

un movimiento mundial para reconstruir la organización social del cuidado, aunando fuerzas para hacer realidad las 5R.

Las Conclusiones Acordadas por la CSW65 contenían importantes referencias a la crisis del cuidado, empezando por el reconocimiento de que unos servicios de cuidado asequibles y de calidad, junto con la reducción, el reconocimiento y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, son factores que favorecen la igualdad de género. Había párrafos operativos sobre las medidas apropiadas para identificar, reducir y redistribuir la parte proporcional del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que recae en las mujeres y las niñas, el reparto equitativo de responsabilidades con respecto al trabajo doméstico y de cuidado, la implantación y promoción de unos servicios sociales asequibles y de calidad, entre ellos guarderías y centros

de cuidado de menores y otras personas dependientes, y medidas para calcular el valor de este trabajo a fin de determinar su contribución a la economía nacional.

La ISP trabajó con un grupo de organizaciones feministas progresistas y de defensa de los derechos humanos y la justicia fiscal que lanzaron el Manifiesto conjuntamente: Reconstruir la organización social del cuidado. El grupo central, que incluye a DAWN, CESR, ActionAid, WomanKind, GATJ, GI-ESCR, FEMNET y la ISP, desarrolló otras líneas políticas y de acción en torno a cada una de las 5R. La ISP decidió formar parte de la Alianza Mundial por los Cuidados, que ahora debate internamente con su membresía (gobiernos, organizaciones filantrópicas y OSC) cómo organizar un espacio de participación y un plan de acción. El Estudio Mundial sobre

los Cuidados, encargado por el WOC, ofreció una base teórica y un enfoque analítico para comprender el concepto de organización social del cuidado y elaboró un análisis sobre cómo funcionó la organización social del cuidado durante la pandemia en una selección de países pertenecientes a las cuatro regiones de la ISP.

La ISP condenó la retirada de Turquía del Convenio de Estambul y organizó una acción en Twitter dirigida al Presidente Erdogan y a las embajadas turcas de todo el mundo, instándoles a reconsiderar esta decisión. La campaña de la ISP sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se vio reforzada por cuatro proyectos (sub)regionales con dos objetivos principales: la ratificación/ aplicación del C190 y la lucha por poner fin a la violencia de género en el mundo del trabajo vinculado a los servicios públicos.

Con motivo de la entrada en vigor, el 25 de junio de 2021, del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la ISP, junto con la Agrupación Global Unions, lanzó un conjunto de herramientas compuesto por una Guía para los facilitadores y un Libro de Actividades para apoyar el Convenio 190 y su Recomendación 206. El material pretendía proporcionar a los sindicatos de todo el mundo herramientas para la lucha por la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Los esfuerzos de la ISP por cambiar el rumbo y el discurso del cuidado son ahora más pertinentes que nunca. Por lo tanto, un enfoque integrado del cuidado es clave para cualquier programa de justicia y transformación social.

— TRABAJADORXS LGBT+

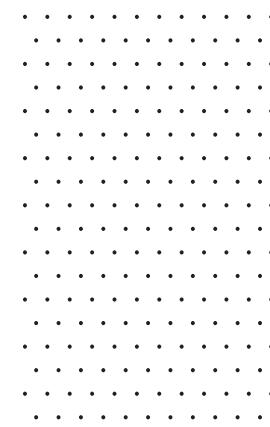
La ISP ha liderado al Consejo Global Unions en la creación de una campaña cohesiva en favor de los derechos LGBT+ a escala mundial. El grupo de trabajo LGBT+ de la Agrupación Global Unions, integrada por un representante de cada Agrupación Global Unions, llevó a cabo actividades a escala mundial para mejorar los derechos LGBT+. Por primera vez, el contingente de la Agrupación Global Unions en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas contó con un grupo LGBT+ constituido por activistas de muchas federaciones de la Agrupación Global Unions.

La persona encargada del proyecto LGBT+ en la ISP dimitió y se contrató a otra. Se publicó el folleto LGBTI de Global Unions en inglés, español y francés, que daba a conocer la labor de las afiliadas a la Agrupación Global Unions en la promoción de los derechos LGBT+. FNV

aprobó una nueva fase del proyecto “Global Unions en defensa de los derechos de lxs trabajadores LGBTI” para el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2021 y el 14 de septiembre de 2023.

El grupo de trabajo LGBT+ de la ISP fue un gran éxito, puesto que las tres reuniones regionales que se celebraron virtualmente en mayo y junio contaron con la participación de más de 70 personas de 50 afiliadas.

Sin embargo, habrá que seguir trabajando sobre las normas de negociación para alcanzar ese objetivo. Con el cambio de responsable LGBT+, esta tarea podría tardar más de lo previsto. El siguiente paso es finalizar el proceso de contratación de la nueva persona responsable de los temas LGBT+.



JÓVENES TRABAJADORXS

El mercado laboral ya era desafiante para lxs jóvenes antes de la pandemia de COVID-19. La pandemia agravó la situación y provocó que muchxs trabajadores jóvenes perdieran su empleo. Según un informe de la OIT, unx de cada seis jóvenes de entre 18 y 29 años dejó de trabajar cuando irrumpió la crisis de COVID.

La pandemia trajo consigo una escasez de puestos de trabajo y provocó la rescisión de numerosos contratos precarios, lo que afectó en particular a lxs trabajadores jóvenes. La recuperación económica se preveía frágil, y la crisis energética desestabilizó aún más el empleo.

La presión en el trabajo aumentó para lxs que seguían empleadxs, con el temor a ser los siguientes en quedarse sin trabajo. Esto llevó a lxs trabajadores, sobre todo a lxs jóvenes, a rendir más con menos, a veces a expensas de su salud mental, su seguridad o sus derechos.

Los confinamientos y el distanciamiento social perturbaron las formas tradicionales de organizar a lxs trabajadores, pero abrieron nuevas soluciones para trabajar en red, socializar y comunicarse en línea. El movimiento sindical tuvo que

adaptarse a estas nuevas formas de trabajo y adoptar nuevas soluciones para seguir organizado, mantener la solidaridad y defender el trabajo decente en el nuevo contexto que podría ser la nueva normalidad en los próximos años.

La ISP se centró en desarrollar las capacidades de lxs líderes de los trabajadores jóvenes y promover la multiplicación de los debates entre los comités de jóvenes existentes sobre cuestiones mundiales como la digitalización, la igualdad de género, el cambio climático, la justicia fiscal, las nuevas formas de trabajo, etc. La ISP también exploró nuevas formas y estrategias para organizar en línea a lxs trabajadores y averiguar la manera en que lxs jóvenes trabajadores podrían contribuir significativamente a esta labor.

Los empleadores exigieron más precariedad y flexibilidad al no tener una visión clara del futuro del mundo tras la pandemia y a las previsiones inestables y pesimistas de la actividad económica. Esta situación contribuyó a agravar las dificultades a las que se enfrentaban lxs jóvenes trabajadores para conseguir oportunidades laborales decentes

y les obligó a aceptar cualquier oferta de trabajo disponible, aunque fuera un empleo atípico, lo que les dejaba en una situación de extrema vulnerabilidad a pesar de ejercer una actividad laboral.

A través de tres proyectos regionales, la ISP siguió movilizando a lxs jóvenes trabajadores sobre cuestiones que les afectan específicamente, como la digitalización, la organización, las nuevas formas de trabajo y otros temas que la ISP considera prioritarios para la juventud, como el cambio climático y la justicia fiscal. Se inició el proceso de planificación para África y los países árabes, destinado a replantear las prioridades regionales de lxs jóvenes trabajadores y adoptar un nuevo plan de acción hasta el Congreso.

La ISP siguió promoviendo la creación de estructuras de jóvenes trabajadores y la capacitación de jóvenes dirigentes en Asia-Pacífico e Interamérica para construir un movimiento sindical más fuerte e integrador. Con el apoyo de FÓRSA, Irlanda, la ISP trabajó para sensibilizar y movilizar a lxs jóvenes trabajadores sobre cuestiones clave en África.

APOYO AL

Desarrollo sindical

La labor de desarrollo sindical y de proyectos de la ISP fue muy intensa en 2021. Debido a las limitaciones impuestas por la COVID-19, muchas de las actividades apoyadas por proyectos se aplazaron hasta los últimos meses del año. El personal de la ISP de las regiones, junto con las afiliadas, logró aplicar planes revisados, encontrar formas innovadoras de seguir avanzando y adaptarse excepcionalmente bien a las nuevas exigencias del trabajo en línea y a las prioridades políticas. Las conversaciones con las Organizaciones de Apoyo Solidario prosiguieron activamente, a fin de negociar el uso de los saldos en 2021, redefinir los objetivos de los proyectos y preparar nuevas fases de los programas en caso de que fuera necesario. En general, a pesar de los retos planteados durante 2020, una gran mayoría de proyectos lograron obtener resultados positivos y respaldaron a las afiliadas de la ISP y sus luchas en las regiones.

En enero de 2021, la unidad de desarrollo sindical dio la bienvenida a un nuevo responsable de proyectos, Luis Miguel Monje, que completó de nuevo el equipo. Empezó a trabajar a tiempo completo en abril de 2021, lo que permitió prestar un apoyo más sólido al personal de las regiones, centrarse mejor en la capacitación

interna, especialmente en el ámbito del trabajo digital, y equilibrar la cartera global de proyectos de una manera más sostenible en el seno del equipo y de cara a las Organizaciones de Apoyo Solidario.

En 2021, la ISP inició una nueva fase del programa de dos años con FNV Mondiaal (Países Bajos), que dio seguimiento a los proyectos piloto de 2020, especialmente en las áreas de género y salud. Union to Union (Suecia) y SASK (Finlandia) prosiguieron su trabajo en el marco del programa en curso. DGB BW (Alemania) aprobó una nueva fase de tres años del trabajo sobre la igualdad en América Latina. FES (Alemania) aprobó un nuevo e importante programa global de tres años en los ámbitos de la digitalización, la fiscalidad, el comercio y los SPC. En 2021, la ISP inició un proyecto de 18 meses con la Open Society Foundations (OSF) destinado a hacer oír la voz de lxs trabajadores de los servicios públicos y sus testimonios en la primera línea de la COVID, y a promover la inversión en los SPC. La ISP también contó con la participación activa y el apoyo solidario de varias afiliadas que respaldaron la labor en materia de proyectos, así como más iniciativas específicas para lxs trabajadores de primera línea. En conjunto, la cartera de proyectos en 2021 contuvo más de 50 proyectos.

El equipo de la unidad de desarrollo sindical brindó un firme apoyo al personal de las regiones, prestó más atención a la capacitación interna, especialmente en el ámbito del trabajo digital, y equilibró la cartera global de proyectos de forma más sostenible en el seno del equipo y de cara a las Organizaciones de Apoyo Solidario.

Se iniciaron nuevos proyectos con DTDA y UtoU en América Latina, centrados en temas relacionados con los derechos laborales o la transición justa. Se aprobó la continuación de proyectos relacionados con el diálogo social y la violencia de género en la región de Oriente Medio y Norte de África, financiados por FNV Mondiaal, y se aprobó la continuación del proyecto mundial sobre los derechos de las personas LGBTI+ gracias a un grupo de financiadores entre los que se incluyen FNV Network y varias afiliadas a la ISP. Se está planificando una nueva fase del programa de 4 años con SASK a partir de 2022. Por último, la organización dio la bienvenida a nuevos proyectos sobre la justicia fiscal y la respuesta a la COVID, que promovían los Servicios Públicos de Calidad y luchaban por las vacunas, gracias al apoyo de Luminate, Wellspring y OSF. En conjunto, la cartera de proyectos en 2021-2022 contenía más de 50 proyectos.

Europa (FSESP)

La COVID-19 volvió a ser el principal reto al que se enfrentaron los servicios públicos de toda Europa y sus trabajadores. Aunque la pandemia tuvo graves consecuencias para todos los servicios públicos, la FSESP centró su atención en gran medida en lxs trabajadores de la salud y la asistencia social que ocupaban un lugar central en la lucha contra la enfermedad, arriesgando sus propias vidas y su bienestar para ofrecer tratamiento y apoyar a las personas enfermas y vulnerables. Resultó preocupante que, casi dos años después de que la pandemia se apoderara de la población, muchxs padecieran COVID de larga duración, una enfermedad que aún no ha sido ampliamente reconocida como enfermedad profesional.

Dos de las principales actividades del año –el [Día de los Servicios Públicos](#), el 23 de junio, y el [Día de Acción Mundial de los Trabajadores de la Salud](#), el 29 de octubre– sirvieron para poner de relieve los esfuerzos realizados por lxs trabajadores de la salud y el cuidado en respuesta a la pandemia. La FSESP aprovechó este último día para publicar [una nueva investigación](#) que reveló el enorme impacto que había tenido la pandemia en el sector del cuidado de larga duración.

El despliegue de las vacunas proporcionó cierta esperanza de que la pandemia se controlaría y la FSESP trabajó junto con la ISP para seguir presionando por una exención de los derechos de propiedad intelectual que permitiera aumentar la producción de vacunas. Esa lucha prosiguió en 2022.

HACIA UN DIÁLOGO SOCIAL SECTORIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES

Habida cuenta de que la pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad del sector de la asistencia social, así como los problemas derivados de la escasez de personal y las malas condiciones de trabajo, el Comité Ejecutivo de la FSESP acordó presentar a la Comisión Europea una solicitud formal de creación de un comité de diálogo social para los servicios sociales. La FSESP llevaba varios años colaborando estrechamente con Social Employers, la Federación de Empresarios Sociales Europeos, y ambas organizaciones siguieron cooperando en una serie de iniciativas importantes a lo largo del año.

CAUSA JUDICIAL CONTRA LA COMISIÓN EUROPEA

En septiembre llegó a su fin el recurso judicial de la FSESP contra la Comisión Europea por su negativa a presentar al Consejo Europeo el acuerdo de 2015 sobre los derechos de información y consulta en las administraciones de los gobiernos centrales para su transposición como directiva. Fue muy decepcionante que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazara el recurso presentado por la FSESP contra la sentencia negativa del Tribunal General de 2020. La sentencia deja abiertas algunas cuestiones importantes sobre el papel colegislativo y la autonomía de los interlocutores sociales de la UE y fue un factor clave en el lanzamiento por parte de la Comisión, a finales de 2020, de una revisión del diálogo social. La FSESP ocupó un lugar destacado

en este proceso, el cual siguió ocupando un lugar central en su trabajo a lo largo de 2022.

CAMBIO CLIMÁTICO

La conferencia COP26 celebrada en Escocia en noviembre acaparó gran parte de la actividad de la FSESP, que colaboró estrechamente con la ISP, la CSI y las afiliadas del Reino Unido para garantizar que la transición justa y el papel de los servicios públicos se abordaran durante los actos y debates.

LEGISLACIÓN EUROPEA

La Comisión Europea estuvo activa en una serie de cuestiones sociales y en materia de salud y seguridad en el trabajo (SST) y la FSESP siguió de cerca el progreso de las directivas clave, entre ellas las relativas al cáncer en el trabajo (revisión de la Directiva sobre carcinógenos y mutágenos [CMD]), la transparencia retributiva de género y los salarios mínimos adecuados. A finales de año, las tres habían entrado en negociaciones tripartitas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento.

Las negociaciones relativas a la Directiva sobre los carcinógenos y mutágenos tuvieron en cuenta [las peticiones de la FSESP](#) al ampliar su ámbito de aplicación a las reprotoxinas e incluir referencias a los productos médicos peligrosos y los fármacos citotóxicos. La FSESP también participó activamente en las consultas sobre la nueva estrategia en materia de salud y seguridad en el trabajo, que se publicó en junio y que incluía propuestas para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud y la asistencia social.

BREXIT

La Presidenta, el Secretario General y la Secretaria General Adjunto se reunieron con los sindicatos del Reino Unido en [febrero](#) para debatir el Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) y el impacto del Brexit en los derechos de los trabajadores y los servicios públicos. En [abril](#), el Comité Ejecutivo acordó una resolución sobre el ACC y otras cuestiones, en la que se subrayaba que la FSESP y sus afiliadas redoblarían sus esfuerzos para evitar todas las formas de dumping social, medioambiental o fiscal que pudieran surgir en la nueva configuración entre la UE, sus Estados miembros y el Reino Unido.

La digitalización fue un tema importante que suscitó un debate específico en el Comité Ejecutivo de la FSESP en junio y, a lo largo del año, la FSESP participó en el lanzamiento del proyecto Nuestro futuro digital de la ISP y de un nuevo proyecto (DIGIQUALPUB) de investigación del impacto de la digitalización en los servicios públicos y sus trabajadores.

La FSESP envió mensajes de solidaridad a muchas afiliadas que emprendieron acciones a lo largo del año, tanto dentro como fuera de Europa, entre las que se incluyen los sindicatos que emprendieron acciones contra el Gobierno de Brasil, los trabajadores que resistieron el golpe de Estado en Myanmar y nuestros compañeros de la CGIL en Italia, que vieron cómo sus oficinas eran atacadas por la extrema derecha.

INFORME FINANCIERO

Estado consolidado de actividades @ 31/12/2022

| | Balance 2020 | Balance 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| Cuotas de afiliación | € 7,670,564 | € 7,712,464 |
| Reembolsos | € 60,706 | € 22,271 |
| Ingresos de intereses e inversiones | € 40,504 | € 39,532 |
| Ingresos extraordinarios | € 21,648 | € 202,001 |
| Total Ingresos Básicos | € 7,793,422 | € 7,976,267 |
| Contribuciones al fondo de ayuda y fondos de solidaridad regionales | € 143,961 | € 176,908 |
| Financiación de los patrocinadores para actividades de proyectos | € 2,528,915 | € 4,670,731 |
| Otras contribuciones a proyectos | | |
| Total ingresos | € 10,466,298 | € 12,823,906 |
| GASTOS | | |
| <i>Actividades estratégicas</i> | | |
| <i>Áreas prioritarias</i> | | |
| Combatir la privatización | € 38,342 | € 63,731 |
| Influir la política mundial | € 59,665 | € 62,075 |
| Sindicalización y crecimiento | € 957 | € 25,000 |
| Derechos sindicales | € 32,336 | € 37,518 |
| Igualdad de género, equidad, diversidad | € 16,306 | € 30,637 |
| Total áreas prioritarias | € 147,606 | € 218,961 |
| <i>Actividades sectoriales</i> | | |
| Administración nacional | € 8,935 | € 132 |
| Gobiernos locales y regionales | € 14,883 | € 44,464 |
| Salud y servicios sociales | € 54,841 | € 63,333 |
| Servicios públicos de distribución | € 13,423 | € 15,956 |
| Personal auxiliar de la educación y cultura | € 3,958 | € 1,140 |
| Total actividades sectoriales | € 96,040 | € 125,025 |
| <i>Actividades genéricas</i> | | |
| Migración | € 4,493 | € 13,203 |
| Desarrollo de capacidad | € 0 | € 0 |
| Proyectos de desarrollo sindical (UD) | € 36,645 | € 36,189 |
| Investigación | € 58,984 | € 59,210 |
| Trabajadores/as de primeros auxilios y cambio climático | € 6,499 | € 3,060 |
| Total actividades genéricas | € 106,622 | € 111,662 |
| <i>Comunicaciones</i> | | |
| Actividades especiales | € 20,000 | € 100,000 |
| Activities (sub)regionales | € 24,750 | € 125,486 |
| Total actividades estratégicas | € 527,430 | € 803,163 |
| <i>Órganos estatutarios</i> | | |
| Congreso | € 181 | € 0 |
| Consejo Ejecutivo (EB) | € 29,841 | € 65,428 |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Comité Mundial de Mujeres (WOC) | € 7,463 | € 4,402 |
| Comité Director (SC) | € 27,423 | € 20,667 |
| Conferencias regionales | € 0 | € 0 |
| Comités Ejecutivos Regionales | € 16,151 | € 12,398 |
| Comités Regionales de Mujeres | € 4,925 | € 554 |
| Comités Consultivos Subregionales (SUBRAC) | € 107,847 | € 11,575 |
| Revisión de los estatutos | € 1,902 | € 25,266 |
| Total reuniones estatutarias | € 195,732 | € 140,289 |
| Reuniones y eventos | | |
| Representación/coordinación Dirección | € 14,881 | € 11,302 |
| Supervisión/coordinación Sede | € 158 | € 1,797 |
| Total reuniones internas | € 15,040 | € 13,099 |
| Representación (sub)regional | € 24,547 | € 17,774 |
| Acuerdo de cooperación FSESP-ISP | € 740,000 | € 750,000 |
| Premio Kluncker Wurf | € 15,000 | € 15,000 |
| Contribuciones | € 7,956 | € 9,958 |
| Gastos de personal | | |
| Gastos personal de la sede | € 3,478,179 | € 3,482,824 |
| Gastos Personal (sub)regional | € 1,219,471 | € 995,224 |
| Total costes personal | € 4,697,650 | € 4,478,049 |
| Gastos oficina | | |
| Gastos oficina de la sede | € 286,915 | € 299,246 |
| Gastos oficina (sub)regional | € 255,980 | € 172,322 |
| Total gastos oficina | € 542,895 | € 471,568 |
| Gastos de personal/oficina asignados a proyectos | -€ 408,265 | |
| Gastos de personal/oficina netos | € 4,832,280 | € 4,949,617 |
| Auditoría | € 112,826 | € 81,694 |
| Gastos extraordinarios | € 158,676 | € 111,597 |
| COVID-19 gastos extraordinarios | € 55,486 | € 32,848 |
| Depreciaciones | € 56,312 | € 62,035 |
| Provisiones | € 597,718 | € 749,239 |
| Retención sobre provisiones | -€ 25,000 | -€ 46,500 |
| Total Gastos Básicos | € 7,314,001 | € 7,689,814 |
| Fondos de ayuda y Fondos de Solidaridad Regionales | | |
| Donaciones de Fondos | € 80,234 | € 54,357 |
| Balance de Fondos | € 63,727 | € 122,551 |
| Total Gastos de Fondos | € 143,961 | € 176,908 |
| Proyectos | | |
| Actividades | € 2,528,915 | € 3,325,416 |
| Balances Proyectosw | | € 1,345,315 |
| Total Gasto Proyectos | € 2,528,915 | € 4,670,731 |
| Total Gastos | € 9,986,877 | € 12,537,453 |
| Variación del Activo Neto | € 479,421 | € 286,453 |



**INTERNACIONAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS**

La federación sindical internacional de trabajadorxs de servicios públicos

**45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX
FRANCIA**

**TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG
WWW. PUBLICSERVICES. INTERNATIONAL**

La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de trabajadorxs en 154 países.

Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad.